- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril de 2025, a la hora 12 y 26:

Sr. Presidente (Arroyo).- Buenos días a todos y a todas. Tenemos quórum reglamentario, con lo cual vamos a empezar esta reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de dictaminar.

Esta reunión ha sido emplazada en la sesión del 8 de abril, con el objetivo de dictaminar sobre la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Expediente 7.861-D.-2024.)

Voy a presentar el proyecto, como autor y como presidente de la Comisión de Discapacidad, y luego vamos a abrir el espacio para todos aquellos que quieran exponer.

Básicamente, el proyecto que vamos a tratar hoy y respecto del cual trataremos de dictaminar plantea la emergencia en discapacidad sobre tres cuestiones centrales.

La primera es la emergencia en lo que hace a las prestaciones, a los servicios para las personas con discapacidad.

La segunda es la relacionada con las pensiones por discapacidad y las dificultades que hoy enfrentan las personas que quieren acceder a una pensión o que ya tienen una pensión por discapacidad.

Y la tercera refiere a algo más subjetivo, pero bien complejo: el maltrato.

Voy a exponer, como autor de la iniciativa, las características que tiene el proyecto de ley y a partir de ahí abrimos el espacio para todos aquellos que quieran exponer.

En el primer punto, cuando hablamos de la situación de las prestaciones, tenemos varios ejemplos críticos, pero solamente presentaré cuatro.

El primero: una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar cuatro horas y que realiza actividades que luego se venden -por ejemplo, en una carpintería o en una herrería-, cobra 28.000 pesos por mes; no por día, sino por mes. Ese monto no se actualiza

desde febrero de 2023. Está claro que estamos ante una evidente emergencia y ante un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla.

Más allá de que el monto es 28.000 pesos por mes, tenemos un problema adicional: las personas no han cobrado ni enero, ni febrero, ni marzo. Hasta ahora no han cobrado lo que deberían cobrar, es decir, esos 28.000 pesos por mes. Al respecto, el organismo regulador les ha planteado que en abril van a cobrar el monto correspondiente a abril y que en mayo van a cobrar los meses de mayo, enero, febrero y marzo.

Quiero dar cuenta del grado de emergencia: a las personas que se trasladan para ir a trabajar, esos 28.000 pesos por mes no les alcanzan para pagar el viaje. Para ir a trabajar, gastan más que los 28.000 pesos que cobran por mes, que no se actualizan desde febrero de 2023.

Segundo caso -solo voy a plantear cuatro; pero, de verdad, tenemos veinte- para marcar la situación de emergencia: el transportista, aquel que transporta a las personas con discapacidad para que puedan ir a hacer sus tratamientos, cobra 541 pesos el litro de nafta. Entonces, como el litro de nafta cuesta casi 1.500 pesos, en vez de transportarlas cinco días, con suerte las transporta dos, con lo cual la persona con discapacidad no se hace el tratamiento que corresponde, que son cinco días de traslado y tratamiento. No hay manera de que alguien lo cubra con un costo de 541 pesos el litro de nafta. Está totalmente desfasado. Por eso, con suerte, el transportista las traslada dos días por semana.

Tercer caso: el acompañante -o la acompañante, porque normalmente es mujer- de un alumno con discapacidad que asiste a una escuela común cobra -cuando cobra- 3.000 pesos por hora, y a los 180 días. ¿Qué hace esa persona? Está buscando trabajo todo el tiempo porque evidentemente ese dinero no le alcanza; y como está buscando trabajo todo el tiempo, rota permanentemente, lo que justamente debería ser al revés. El sistema establece que el asistente acompañe a la persona con discapacidad durante un año, pero no hay manera de que lo pueda hacer cobrando a los 180 días, o no cobrando. Entonces, se va y el nivel de rotación es altísimo.

Cuarto y último ejemplo: los hogares, asociaciones civiles sin fines de lucro, están todos a punto de cerrar, de verdad. Todos tienen deuda con la ex AFIP, ahora ARCA. Les prometieron que hasta el 30 de junio no hablan de esa deuda, pero el 30 de junio es dentro de 60 días. Están viendo cómo hacen, girando en descubierto, haciendo rifas, yendo y

vinieron en estado de desesperación. De verdad, los hogares están a punto de cerrar.

Ninguno de los problemas que yo planteo arrancó hace catorce meses. La situación crítica de las personas con discapacidad viene desde hace tiempo, pero objetivamente ha empeorado porque no ha habido ningún aumento. Este año no ha habido ningún aumento para las prestaciones que se dan. Objetivamente han empeorado. La cifra de 28.000 pesos por menos no reviste ningún análisis, ninguna lectura lógica.

El primer punto que trata este proyecto es atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones; de allí la emergencia en el tema de las personas con discapacidad.

El segundo punto son las pensiones. Voy a ser breve. Tenemos 1.200.000 pensiones por discapacidad. El gobierno ha iniciado una auditoría, lo que es absolutamente correcto. Está claro que hay personas que han accedido a una pensión que no les correspondía. Entonces, hay que hacer una auditoría y quitarles la pensión.

Pero la auditoría no se está haciendo como se debería hacer. La forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados, muy por encima del promedio, y evaluar la situación; identificar las localidades donde la cantidad de personas con pensión por discapacidad está muy por encima del promedio e ir a evaluar eso.

No se debe poner en estado de desesperación -que es lo que está sucediendo- a 1.200.000 personas, a las que les llega una Carta Documento que no saben cómo atender, a las que les llegan una Carta Documento a lugares en los que no viven porque está desfasada la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además, sabemos que estamos en una generación de inquilinos; y en el caso de estos, a la tercera vez que no responden, ya sea porque no les llegó la Carta Documento o porque no están viviendo en ese lugar, les dan de baja la pensión. Les envían mensajes por *WhatsApp*, por mensaje de texto, por mail, y les piden que incorporen sus datos, contradiciendo toda la normativa del Estado nacional, que indica que cuando a alguien le llega un mensaje pidiéndole que ingrese sus datos, no debe hacerlo porque puede ser una estafa.

En este caso, les está llegando un aviso desde algo que se llama ANDIS, que nadie sabe qué es. Entonces, a la persona que está en su casa y que recibe un mensaje de

ANDIS, se le pide que ingrese sus datos, contradiciendo toda lógica y el sentido común de tener temor a una estafa.

Hay 500.000 personas que se presentaron para acceder a la pensión y todavía no han podido tener acceso. Ellas realizaron todo su trámite, gestionaron el Certificado Único de Discapacidad, con la evaluación correspondiente, es decir que realizaron todo el proceso administrativo.

En los últimos catorce meses, de las 500.000 personas que han hecho todo su proceso y están habilitadas para acceder a la pensión, solo entraron 586, es decir que ingresó el 0,1 por ciento y el resto no ha accedido.

Está claro que es necesario hacer una auditoría, y todos los espacios políticos de la Comisión de Discapacidad acompañamos esta idea. Pero una cosa es hacer una auditoría e identificar dónde están los problemas, y otra cosa es poner en estado de desesperación a las personas con discapacidad.

Cabe precisar que las personas con discapacidad van a la Agencia Nacional de Discapacidad, hacen diez horas de fila y cuando llegan a la instancia de mostrar el papelito que tienen, alguien los recibe y les dice: "ya está; listo". Entonces, la persona se va sin saber si fue receptado o no, si sigue con la pensión o no, es decir, de qué manera transcurre la situación.

Si nosotros, en la Comisión de Discapacidad, no tenemos información, qué le toca a la persona que hace diez horas de fila, de manera desesperada, para mostrar lo evidente. Les piden a las personas que vuelvan a hacer el certificado médico. En el caso de una persona que tiene una ceguera de nacimiento, es claro que pedirle que vuelva a realizar todo el proceso y que presente todos los estudios médicos, cuanto menos es absurdo, por no decirlo de otra manera.

Considero que el problema es que la Agencia Nacional de Discapacidad está buscando la cuadratura del círculo. Le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado un estado de desesperación al conjunto del sistema, desacomodando las prestaciones y la situación de las pensiones, lo cual genera una angustia profunda.

El tercer punto -y voy a ser breve- es el maltrato. Y en esto sí quisiera poner un punto sustantivo. El vocero presidencial nos mostró una radiografía de un perrito y una colita, contándonos que la persona había accedido a una pensión por discapacidad. Eso no es cierto. Nunca esa persona

accedió a una pensión por discapacidad. Se generó una estigmatización.

Las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas desde hace mucho tiempo, vienen sufriendo falta de servicios y de apoyo, y se ha decidido estigmatizarlas.

El gobierno nacional dictó la resolución 187/2025, del 16 de enero, que básicamente cambia el sistema de pensiones: vuelve cien años atrás -a la década del 40 del siglo pasado-, vuelve al concepto de pensión por invalidez laboral, y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como "idiotas", "imbéciles", "débiles mentales". De verdad que retrocede cien años.

Esa resolución hoy está vigente. El 27 de febrero, el gobierno pidió disculpas en un comunicado oficial, y dijo que iba a modificar la resolución, pero no la modificó. Quiero ser claro: en el 2025, cuando ya transcurrió un cuarto del siglo XXI, en la Argentina hay una resolución vigente que denomina a las personas con discapacidad como "idiotas", "imbéciles", "débiles mentales".

Reitero que se trata de una resolución que no se dictó en el siglo XIV ni hace cien años, sino hace tres meses -que lastimó infinitamente a muchas personas y a numerosas familias-, y el compromiso que tomó el gobierno, como correspondía, fue cambiarla, pero no sucedió hasta el día de hoy.

El proyecto de ley en tratamiento apunta a las tres cuestiones. En primer lugar, apunta seriamente a resolver el problema de las prestaciones. Toma como línea de base el mes de diciembre de 2023 -antes del 120 por ciento de devaluación-, actualiza el valor de las prestaciones del nomenclador al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y, en función de eso, compensa.

Entonces, lo primero que hace es compensar, para evitar que los hogares cierren y para que las personas con discapacidad -que hoy están en estado de desesperación por no poder hacerlo- puedan acceder a los medicamentos, a los tratamientos, al traslado y a los servicios básicos.

Junto con todo ello, a partir de esa compensación habla de un nuevo nomenclador -que lo tiene que hacer la Agencia Nacional de Discapacidad con el directorio-, que sea racional, lógico y razonable en términos de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad.

Este proyecto ya fue aprobado por las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. Como la Comisión de Presupuesto y Hacienda nunca se reúne, fuimos al recinto y emplazamos, y por eso estamos hoy acá. Se han incorporado mejoras sustantivas que fueron propuestas por varios bloques y por diferentes diputados.

Quiero mencionar que una mejora sustantiva es el cuidado del sistema de seguridad social. Sé claramente que varios diputados y diputadas tenían temores respecto de cuánto esto altera el sistema de seguridad social, pero en toda la redacción está claro que queda cuidado algo que es crítico en la Argentina, que es el sistema de seguridad social: hoy, las prestaciones de discapacidad, esa Agencia Nacional de Discapacidad, PAMI, y todo el conjunto del sistema de seguridad social, que en esencia son obras sociales y prepagas.

También se da claridad sobre un punto, que es la imposibilidad de que una persona tenga a la vez una jubilación por discapacidad y una pensión por discapacidad. Esto estuvo siempre en el texto, pero quedó más claro. Hago referencia a eso porque quienes hacen una evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse. Queda claro que una persona que tiene pensión por discapacidad o que tiene jubilación por discapacidad no puede ser titular de ambas prestaciones a la vez. Eso modifica mucho las proyecciones y los análisis que se hacen en torno al impacto fiscal.

Finalmente, actualiza el valor de los aranceles en base al decreto 274/2024, que es como se actualizan las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones, y lo que toman como referencia varios organismos de salud.

Es evidente que estamos ante una emergencia. No es que el sistema está un poco desfasado, que tiene problemas o que hay un porcentaje que falta ajustar, sino que está totalmente desfasado y desactualizado, porque el cobro de 28.000 pesos por mes no tiene ninguna lectura posible. Es evidente que hay una emergencia.

Junto con todo esto, debemos tener claridad respecto de que necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable. No hay que volver a la década del 40 del siglo pasado -cien años atrás-, con el concepto de pensión por invalidez laboral y el maltrato. Uno se preguntará cómo se le puede ocurrir a alguien hacer una resolución que maltrata en forma directa a las personas.

Para ser sincero, considero que el organismo rector -la Agencia Nacional de Discapacidad- quedó atrapado entre

dos tensiones: una que le propone un ajuste imposible de cumplir y otra que le dice que no cumplamos las resoluciones de Naciones Unidas, que no cumplamos con la convención. Entonces, fueron a buscar cien años atrás, cuando esos conceptos tenían sentido, pero han dejado de tenerlo.

Sobre esa base, el proyecto en tratamiento declara la emergencia hasta fines de 2027. Asimismo, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está totalmente desfasado y para tener un nuevo nomenclador. También ordena sanamente el tema de las pensiones, sin generar un impacto fiscal sustantivo, y se sale del maltrato.

Esto ya fue tratado en varias oportunidades y es lo que ponemos en consideración hoy para buscar el dictamen del conjunto de las comisiones. Si les parece bien y están de acuerdo, podemos circular el dictamen a medida que van haciendo uso de la palabra.

Reitero que, claramente, estamos ante una evidente emergencia por un problema serio y fuerte. El sistema de prestaciones de discapacidad está totalmente desacomodado y desfasado, y el nivel de dolor de las familias y de las personas es inmenso. No es un proyecto que busca una grieta o que busca tensionar, sino que es de pura humanidad, racionalidad económica y de pura justicia.

Esperamos que hoy los diputados firmen el dictamen.

A continuación, voy a darle la palabra a aquellos que me la han pedido.

Tiene la palabra el señor diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Sr. Yedlin.- Muchas gracias, señor presidente. Hoy nos encontramos aquí por imperativo del pleno de la Cámara, que ha emplazado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a su presidente para que nos reunamos. Lamentablemente, me parece que este va a ser el mecanismo por el cual tendremos que avanzar. Ustedes saben que muchos proyectos -sobre todo, de la Comisión de Acción Social y Salud Pública- pasan por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y están a la espera de que el diputado Espert se decida a convocarnos. Celebro que este mecanismo funcione; habrá que seguir implementándolo.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ya dio dictamen a este proyecto, pero creo que en esta oportunidad, gracias al aportes de muchos, viene mejorado.

Hay un tema dentro de la seguridad social argentina, y es que las prestaciones por discapacidad son pagadas directamente desde el Fondo Solidario de

Redistribución, que se genera con el 15 por ciento de los aportes y contribuciones de todas las obras sociales nacionales y prepagas. Con este fondo, a través de un mecanismo llamado "Integración" se pagan las prestaciones por discapacidad.

Sr. Presidente (Arroyo).- Perdón, diputados, así es muy difícil escuchar. Les pido un poco de silencio.

Sr. Yedlin.- Estaba explicando lo del Fondo Solidario de Redistribución y el mecanismo denominado "Integración", que es el pago directo desde este fondo, cuyo objetivo inicial era el pago de las patologías de alto precio y baja incidencia; pero luego se le sumó el mecanismo "Integración" y hoy prácticamente el ciento por ciento de este fondo se va en gastos en discapacidad.

El Fondo Solidario de Redistribución, de la Superintendencia de las Obras Sociales Nacionales y prepagas, además de las prestaciones sanitarias, paga las prestaciones educativas a la discapacidad y el transporte a la discapacidad. Esto es así. En este momento, prácticamente el ciento por ciento de este fondo se va ahí.

Hay que discutir algunas cosas para mejorar el fondo. Ustedes saben que muchas personas que se pasan de la obra social que les corresponde por su trabajo a una prepaga, tienen que pagar un extra para que el plan mínimo de la prepaga los acepte. Sobre ese plus no se deja el 15 por ciento en el fondo; este es un tema que se podría discutir.

También se podría debatir el hecho de que este fondo no pague las prestaciones de educación -que las pagara el Ministerio de Educación u otra agencia- o de transporte. Además, como muy bien dijo el diputado Arroyo, todo debe ser auditado.

Sr. Heller.- Perdón, presidente, pero me están diciendo los diputados que tienen dificultades para oír.

Les pido a los diputados y diputadas que hagamos silencio y escuchemos las intervenciones. Muchísimas gracias.

Sr. Yedlin.- Gracias.

Lo que no podemos hacer -me parece que este es el punto- es solucionar la falta de financiamiento de la seguridad social para estas prestaciones a través del no ajuste de los valores lógicos que permitan que las prestaciones se den. Y eso es lo que estamos viendo.

Creo que este proyecto, con todo el recorrido que ha tenido y que todavía le falta tener para transformarse en una realidad, va en ese sentido: poder sostener un sistema de seguridad social en la Argentina, con los magros -todavía- aportes y contribuciones generados por los magros salarios en promedio y con prestaciones que superan las capacidades del sistema.

Me parece que el nuevo dictamen que está circulando es superador y es una muy buena noticia que podamos tratarlo pronto en el recinto.

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra la señora diputada Mónica Fein.

Sra. Fein.- Gracias, señor presidente.

Lamento que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no esté aquí presente, porque esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar aquí presente a partir del quórum que se ha logrado, en el proceso que ustedes explicaron muy bien.

Seré breve, porque creo que ustedes ya han sido muy claros. El diputado Arroyo mencionó la palabra "desesperación", y esto es lo que observamos en la mayoría de las personas con las que hablamos -tanto las que han estado hoy aquí como las que escuchamos en nuestras provincias-, debido al mecanismo perverso que este gobierno nacional ha definido para que le cierren los números. El gobierno ha decidido dejar a los más vulnerables, a aquellos que necesitan el acompañamiento del Estado -ese Estado que hoy se discute-, en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo restándoles prestaciones a partir de la limitación en el pago de los distintos servicios -como la posibilidad de traslado, las maestras integradoras y los aportes que les permiten la subsistencia-, sino también acusándolos, a través de una auditoría, con cuestiones que perfectamente se pueden corroborar desde el Estado. Hasta han hablado de que hay personas que tienen aviones, como si eso no lo pudiera corroborar el Estado a partir de toda la información que tiene. Lo cierto es que dejan a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, de vulnerabilidad y de abandono.

Por eso estamos aquí, para decir que queremos que esta declaración de emergencia sea ley. En general, no apoyo ideas de emergencia que no tengan claridad respecto de hacia dónde van; si no, no son más que ideas declarativas.

Este proyecto sí tiene claridad respecto de hacia dónde va, pero fundamentalmente es un llamado que este Parlamento hace al gobierno nacional para decirle que, a pesar de no tener presupuesto, no podemos cumplir con el Fondo Monetario Internacional a costa de los más débiles de los débiles.

Como muchos aquí, yo también tengo un familiar -una sobrina- que tiene discapacidad. Aquellas personas que han tenido la suerte de nacer en familias con recursos económicos van a poder hacer esa auditoría; de alguna manera, van a poder ser acompañadas por su familia. Pero esta decisión que toma el gobierno nacional deja solos a los más vulnerables de los vulnerables, a aquellos que no tienen una familia con recursos económicos, recursos simbólicos, viviendas, posibilidades de transportarse. En la provincia, Santa Fe, están haciendo que se trasladen 300 kilómetros para hacer una auditoría. Distintos legisladores de mi provincia han planteado que es inaccesible llegar a los lugares donde se plantea esta teórica auditoría.

Ninguno de nosotros se equivocó. No es una auditoría. Es la decisión de que cierren los números y de que muchos no lleguen; y, por lo tanto, dar de baja 300.000, 400.000 o 200.000 pensiones de aquellos más vulnerables de los vulnerables.

Señor presidente: nosotros vamos a acompañar el dictamen que ya firmamos en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y que por decisión mayoritaria viene a este plenario. Digo "mayoritaria" porque la mayoría de nosotros entiende que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente. Lamentablemente, tenemos un presidente que utiliza el síndrome de Down para referirse a un gobernador, usándolo como un insulto; esta agresión en boca de un presidente habla de la crueldad, de la falta de humanidad, y de la incapacidad de comprender lo que es una sociedad compleja y diversa. Debemos saber que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ser acompañados, y debemos ser acompañados solidariamente por el Estado.

De manera que venimos a ratificar nuestro compromiso -por supuesto, lo hemos hecho en la Comisión de Acción Social y Salud Pública- y a expresar que, más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un tratamiento digno, humano, respetuoso e inclusivo, les decimos a todas las organizaciones que nos han contactado que no están solas. La mayoría de los que integramos este

Congreso quiere darles respuesta y vamos a trabajar para hacerlo, como lo han hecho los que están hoy presidiendo esta comisión.

Damos nuestro apoyo al dictamen de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública, para que por fin podamos discutirlo en el recinto y les demos un mensaje a tantas personas que están sufriendo y esperando que esta Casa les dé una respuesta. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra la señora diputada Coli.

Sra. Coli.- Señor presidente: en primera instancia, quiero agradecerle al diputado Heller por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por hacer ese llamado al titular de la comisión, José Luis Espert, por no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate.

En la vida, por lo general, se puede estar o no de acuerdo, pero cuando uno cumple una función tiene que hacer lo que se debe. Hoy tenía que hacer eso el diputado Espert y no está cumpliendo su función, es decir, venir y cumplir su rol, escuchar lo que quizás no quiere escuchar. Lamentablemente, no da una buena imagen de su función.

Más allá de eso, hoy nos trae una gran temática a debatir, que es la emergencia en discapacidad. Estamos totalmente de acuerdo, coincidimos en que hoy la discapacidad transita a una emergencia.

Una vez más debemos recordar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008, y a la que nuestro país le dio jerarquía constitucional en 2011 mediante la ley 26.378. No es un detalle menor.

Si miramos esa línea de tiempo, hasta el día de hoy han pasado cinco presidencias, en las cuales la discapacidad no ha tenido la atención ni la inversión de los recursos necesarios para tener dinámica, contención, planes de atención y programas para que realmente hoy la Argentina -precisamente esta Cámara- no esté discutiendo una emergencia. Realmente es vergonzoso.

La emergencia que hoy nos preocupa como prioridad es la relativa a los prestadores. En las salas áulicas de las primeras infancias, que es donde más tenemos que proteger y cuidar, lo vemos. Hoy estamos peleando con las obras sociales, que son el ámbito donde el Estado debería atender a

todas esas discapacidades que hoy llegan a las aulas. Es fundamental porque son ciudadanos que necesitan autonomía. Es necesario que esos docentes tengan las capacitaciones y encuentren las habilidades para que el día de mañana las personas con discapacidad puedan desarrollarse con toda libertad y autonomía. Es una tarea nada fácil.

Entonces, no hablamos solamente de la persona mayor, sino que debemos comenzar desde las primeras infancias. Ahí están los acompañantes terapéuticos, el kinesiólogo, el psicólogo, la mamá, el papá, la familia, la fonoaudióloga; todos acompañan. Sabemos que todos forman parte de la atención necesaria, que también requieren una retribución económica, más aún con la economía actual, que está totalmente atrasada. Todo repercute con todo, porque todos necesitan vivir. Todos necesitan. Entonces, esto impacta duramente en ese desarrollo y crecimiento.

Lógicamente, también impacta en aquella persona mayor que, por un accidente, por una enfermedad neurodegenerativa o porque la vida la llevó a que tuviese alguna situación de salud, queda con una discapacidad y necesita de ese prestador que se formó en la educación pública y que tiene el conocimiento para poner al servicio de la discapacidad. Así está mi país.

A este padecimiento debemos agregar también una famosa resolución. Hay que recordarla, porque todavía sigue tan estática como fue publicada. Me refiero a la resolución de la ANDIS 188/25, aunque la medida a la que me refiero no está en la misma resolución, sino escondida en la página 37 del Anexo I. Allí se habla de "discapacitados", una definición que ya habíamos erradicado. En la Argentina hicimos el cambio cultural, porque ya el discapacitado tenía otra impronta. Hicimos un cambio de paradigma, ya no era el idiota, el que estaba escondido, sino el que ya había sociabilizado y estaba integrado o incluido. Esa medida todavía sigue vigente y duele, tanto a la persona que padece la discapacidad como a sus familiares.

Entonces, creo que tenemos que refrescar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley que le dio jerarquía constitucional. Tenemos mucho por hacer y creo que es el momento para reconocerlo y para darle un lugar importante en las partidas presupuestarias.

Queremos que las primeras infancias y los adultos mayores que necesiten ser atendidos por aquel prestador que se ha preparado para colaborar, ayudar, sostener y dar

calidad de vida a cada uno de los discapacitados, puedan hacerlo. Realmente deben tener ese reconocimiento para seguir sosteniendo la inclusión social que tanto necesitan.

Seguramente el tema de las pensiones es una deuda pendiente. Nosotros estamos por presentar un proyecto con respecto a las pensiones para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta lo que la convención de 2008 ya planteaba. Así que en unas horas seguramente lo estaremos presentando.

Lo que se pedía en aquel año 2008 tenía que ver con las pensiones no contributivas por discapacidad para la protección social. Durante todos estos años que han pasado, con gobiernos de distintos colores políticos, nunca se tuvo en cuenta lo que se pedía en esa convención.

Así que nosotros vamos a acompañar esta emergencia. Estamos de acuerdo, es necesario y es urgente declarar una emergencia. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra el señor diputado Castillo.

Sr. Castillo.- Señor presidente: en primer lugar, creo que es importante hacer notar que el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -comisión que también integro-, no está cumpliendo con la resolución de la Cámara que dispuso el emplazamiento de este plenario de comisiones, en el que tendría que estar presente.

A esto se suma la ausencia total de diputados y diputadas de La Libertad Avanza de las tres comisiones. Entonces, la valoración política es muy clara. Este gobierno quiere seguir dándoles la espalda a las personas con discapacidad, a todos los colectivos de personas con discapacidad, que vienen peleándola o remándola, y a todas y todos los trabajadores implicados en las prestaciones de discapacidad. Efectivamente, este tema es muy grave, urgente y perentorio.

Acá se mencionó la palabra "desesperación", que es lo que hoy agobia a muchas familias, a muchas personas. Cuando vos no podés tener la atención mínima que te corresponde ni cobrar un ingreso mínimo por la actividad que hacés, la situación es verdaderamente desesperante, y viendo el pacto que el gobierno acaba de firmar con el Fondo Monetario Internacional, uno tiende a pensar que esto se va a agravar aún más, así como la situación de los adultos mayores.

El tema de la discapacidad es una de las preferencias de la "motosierra" de este gobierno. Además, me pongo a pensar si ninguno de los diputados y diputadas del oficialismo tiene alguna persona con discapacidad que cobra pensión y que está viendo cómo se le evapora el poder de compra de esa pensión, que está absolutamente desfasado de la necesidad. Insisto, tal vez no conocen o no tienen ningún familiar, vecino, amigo ni conocido que viva situaciones tan terribles a la hora de tener que tramitar los certificados, con colas interminables en algunos lugares o que, luego de hacer los trámites, no le validan la certificación y no pueden cobrar. Esto es verdaderamente gravísimo.

Además, se planteó la dimensión de lo que cobran los prestadores y prestadoras. En ese marco, existe otro punto porque también hay una situación de precarización laboral heredada que ya motivó muchas protestas en el gobierno anterior y que ahora se ha profundizado.

Entonces, independientemente de que para nosotros el proyecto se queda corto en varias cosas, lo acompañaremos con nuestra firma, como dictamen de mayoría, porque efectivamente la situación es desesperante y urgente. Asimismo, debe haber también un compromiso de todas las diputadas y diputados que están hoy en este recinto en cuanto a no aceptar el veto presidencial frente a la posible sanción de esta ley.

En efecto, es muy probable que esta ley de emergencia obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados e incluso en el Senado, pero sabemos que hay un mecanismo constitucional muy antidemocrático, que es el veto, que está asociado a otro mecanismo muy antidemocrático también y que son las condiciones para revertir un veto.

Entonces, alerta sobre las posibles "pelucas", que es la forma como bautizaron a algunos diputados y diputadas que primero votan una cosa y después, cuando el gobierno veta, se dan vuelta y se ponen la peluca para sostener el veto. Acá no puede haber peluca; las personas con discapacidad no pueden aceptar las razones que algunos dicen, como "Me lo dijo el gobernador", "Me lo dijo la gobernadora", "Negocié un cargo para...", entre otras. Estamos hablando de un tema verdaderamente grave y muy sensible, como tantos otros que hemos tratado, porque la motosierra pegó en los sectores más sensibles; y estamos hablando también de colectivos que se están organizando, manifestando y movilizándose desde hace mucho tiempo en todo el país. Prácticamente no existe ciudad en donde no haya una

organización de discapacitados y discapacitadas hablando de este tema y planteando la necesidad y la presión para aprobar esta ley.

Así como planteamos "jubilados o FMI", "educación o FMI" y "salud o FMI", ahora decimos "discapacitados y discapacitadas o FMI". Esa es la alternativa. Un plan donde se les recorta a los más vulnerables y a la vez se toman medidas para favorecer el negociado de la bicicleta financiera o el enfrentamiento de ese plan. Sabemos lo que significa que hoy estemos acá reunidos; no es solo el fruto del trabajo de diputados y diputadas, sino sobre todo de quienes se han movilizado y han peleado, y obviamente me refiero a los colectivos de discapacidad.

Por lo tanto, con todo nuestro respaldo, apoyamos y nos comprometemos para que se sancione la ley y seremos la oposición a un eventual veto presidencial. Creo que está anunciado por la ausencia de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Me gustaría que cuando entrevisten a esos diputados y diputadas les pregunten cómo pueden ser tan... -y utilicen el epíteto que a ustedes se les ocurra- para darles la espalda a las personas con discapacidad. Creo que nos faltan palabras -o nos sobran, según cómo lo veamos- para calificar a este tipo de personas.

Insisto, es un tema muy sensible y para quienes lo sufren es muy urgente y necesario. Los diputados y diputadas que no vinieron no se atreven a dar la cara. Muchas veces vinieron a decir que están en contra de algún recorte, pero en este caso son tan cobardes que ni se animan a decir que no. Simplemente lo hacen con los pies y no vienen porque efectivamente saben que se lo van a demandar. Esa ausencia, ese no venir, es como si vinieran y dijeran que están a favor de los recortes, de no darles ese derecho y de pagarles una miseria.

Simplemente, expongo nuestro apoyo y anticipo nuestra firma, como ya lo ha hizo nuestro compañero Nicolás del Caño en las otras reuniones de comisión. Por lo tanto, de nuestra parte, desde el bloque de Frente de Izquierda Unidad apoyamos el dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Arroyo).- Tenemos varios oradores por delante. Entonces sugiero que hablen solamente cinco minutos. Por favor, les pido que cada uno sea breve para poder llegar a tiempo y cumplir con todos.

Tiene la palabra el señor diputado Leiva.

Sr. Leiva.- Señor presidente: seré breve y muy claro. Usted sabe que no me caracterizo por no decir las cosas que pienso y siento. En ese sentido, no solamente me preocupa, sino me lastima la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, que sin duda está en línea con lo que ellos defienden, que se relaciona con el ajuste feroz que se vive a lo largo y ancho del país, pero que, en este caso específico, atenta contra los más vulnerables, a quienes siempre, los que transitamos el mundo de la política, nos comprometemos a defender. Sin embargo, la defensa que tiene Espert es no venir a cumplir con su trabajo y, como presidente, no instar a que se apruebe el presupuesto nacional.

Hoy me acompañan mi compañera de la provincia del Chaco María Luisa Chomiak y mi compañero de bloque Juan Manuel Pedrini. Y también tengo que decir que mis comprovincianos Polini, Cipolini, García y Quiroz brillan por su ausencia.

Señor presidente: tengo que decirles, fundamentalmente a los chaqueños, pero también a las personas con discapacidad y a sus familiares, que quienes estamos acá venimos a acompañar esta iniciativa, y que verdaderamente quienes hoy no están aquí para acompañar este proyecto tan importante sin ninguna duda no les importa absolutamente nada la situación de este grupo de personas.

Esta iniciativa también tiene que ver con las instituciones que trabajan en favor de la discapacidad, que hoy en día ven cómo los pagos brillan por su ausencia. Ni hablar de las cuestiones vinculadas al trabajo o a sus trabajadores, que también experimentan las consecuencias de esto que hoy estamos viviendo.

Por todo esto, quería expresarme brevemente para decirles a todos los presentes que, sin duda, acompañamos este proyecto con el fin de que la emergencia pueda convertirse en ley.

Como decía el diputado Castillo, seguramente quienes hoy no están acompañándolo no solamente se van a poner la peluca, sino que van a aparecer para blindarlo. Esto también hay que decirlo: más allá del esfuerzo que nosotros estamos haciendo, no tengo la menor duda de que Milei va a vetar esta iniciativa. Porque si no se ruborizan al utilizar términos como "idiotas" o "imbéciles" -y todo lo que ya sabemos y acá se dijo acá-, ¿qué podemos esperar? Verdaderamente no podemos esperar otra cosa. Sin embargo, es importante decirle a todo ese sector de nuestra comunidad que

hay hombres y mujeres que estamos comprometidos, que hay hombres y mujeres que no vamos a bajar los brazos más allá de esta situación que estamos viviendo, que es lamentable.

Vienen y dan la cara para defender a los estafadores de \$LIBRA, pero no vienen acá a dar la cara para defender a aquellos que verdaderamente necesitan de nuestro acompañamiento.

Por eso -y con esto termino-, siempre digo que, en lo referido al país, hay un responsable político que se llama Javier Milei. En lo que se refiere a la provincia del Chaco, hay otro responsable político que se llama Leandro Zdero, que claramente dio directivas a los diputados de su provincia para que no defiendan a los discapacitados que tenemos en Chaco.

Sin ninguna duda, vamos a acompañar esta iniciativa tan importante para las personas con discapacidad y para las instituciones que trabajan en esta materia. Gracias, señor presidente. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Arroyo).- Paso a leer el listado de oradores que tengo por si alguien quiere incorporarse. Han pedido la palabra los diputados Martín Maquieyra, Ana Carla Carrizo, Eduardo Valdés, Natalia Sarapura, Esteban Paulón, Alejandro Vilca, Victoria Tolosa Paz, Pablo Juliano, Liliana Paponet y Germán Martínez. Si alguien desea hacer uso de la palabra y no está en el listado, que por favor se acerque y me lo comunique.

Tiene la palabra el señor diputado Martín Maquieyra.

Sr. Maquieyra.- Señor presidente: nuestro bloque va a plantear algunas modificaciones y diferencias con relación al dictamen que hoy se está debatiendo aquí. Me gustaría fundamentar cada uno de esos puntos y mencionar otros agregados que creemos pertinentes para que este proyecto de ley verdaderamente empiece a resolver el gran problema que tienen todas las personas con discapacidad.

El diputado preopinante y otros hablaban sobre la falta de actualización en el nomenclador. En este sentido, se habla mucho de la actualidad, es decir, de lo sucedido en los últimos meses. Pero a mí me gustaría ir un poco más atrás, porque creo que la responsabilidad por la situación que las personas con discapacidad viven hoy en día es de todos los que han gobernado y, sobre todo, de aquellos que más han gobernado en el último tiempo.

Si vamos al año 2020, hubo una inflación de un 36 por ciento, pero el nomenclador se actualizó en un 10 por ciento. Es decir que se comieron unos 23 puntos en términos reales. Eso ocurrió en plena pandemia.

Si vamos al 2021, hubo una inflación del 50 por ciento y un ajuste del nomenclador de un 34 por ciento. Es decir, un 12 por ciento en términos reales; en 2022, hubo un 94 por ciento de inflación y un 73 por ciento de aumento, lo que significa un 12 por ciento en términos reales. En 2023, la inflación fue del 211 por ciento, pero la actualización, del 120 por ciento. Es decir que esta última fue de un 40 por ciento en términos reales; lo cual es muy parecido al 40 por ciento que les robaron a los jubilados con la fórmula de Alberto Fernández.

Si vamos al 2024 -gestión del gobierno actual-, hubo una inflación del 117 por ciento y una actualización de casi un 100 por ciento. Es decir que hubo un 9 por ciento de retraso en términos reales. En este caso, se trata del menor retraso de los últimos años, pero igualmente es un retraso que hay que solucionar.

Por eso, nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor, tanto del nomenclador como de las prestaciones, ya que creemos que este es un problema que hay que solucionar. Esta es una realidad que hoy están viviendo todas las personas con discapacidad y, en este caso, también aquellos que prestan estos servicios.

En un segundo punto, nuestro dictamen plantea adaptar la terminología o el vocabulario que se emplea en general para todas las personas, sobre todo, en los organismos. Nos parece central que el vocabulario sea acorde a lo establecido por la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Esta consideración también se encuentra en el dictamen de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. En este tema coincidimos. Creemos que se trata de algo necesario, porque lo primero que tenemos que hacer para garantizar un derecho es entender cuál es la situación para poder hablar correctamente.

El tercer punto de nuestro dictamen está vinculado a una de las preguntas que se le hizo el señor jefe de Gabinete sobre los talleres protegidos y a la desactualización que hay en esos 28.000 pesos que se les paga. La respuesta planteada por el jefe de Gabinete fue que ese monto no se había actualizado porque esa ley no estaba reglamentada. Con lo cual, planteamos que el Poder Ejecutivo la reglamente y se actualicen los montos de los talleres

protegidos porque, por supuesto, coincidimos con lo que aquí se dijo en cuanto a que hoy es inviable que una persona pueda trabajar con esos montos.

Quizás la diferencia con los otros dictámenes y con lo hablado hasta aquí es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es que podamos conseguir un trabajo, que podamos ser libres, y que no nos aten a la voluntad de un Estado o de un gobierno determinado. Por eso, nosotros planteamos una modificación a la ley laboral, a la ley de empleo. Como hoy existe un mínimo de personas con discapacidad -son 1.700 las personas con discapacidad que hoy acceden a un programa por el cual a su empleador se le reduce un 50 por ciento la carga social-, nosotros planteamos triplicar el tiempo por el cual se le otorga ese beneficio.

Creemos que la mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco; sobre todo, un trabajo en el ámbito privado. Creemos que esa es la manera en la que la Argentina puede salir adelante. Creemos que ese derecho se les debe brindar a todas las personas con discapacidad.

Esto es algo que vemos claramente en esta Cámara y en cualquier empresa: hay una dificultad real para que la persona con discapacidad pueda acceder a un empleo. Por lo tanto, debemos mejorar esos programas para lograr que esa persona pueda ser libre, vivir con su salario y no depender de una pensión otorgada por el Estado. Este es el cambio más significativo que hemos planteado, que ha sido acompañado por los diputados de mi bloque. Este es el dictamen que llevaremos a una futura sesión. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizo.

Sra. Carrizo.- Señor presidente: seré muy breve porque en nombre de nuestro bloque ya habló la diputada Marcela Coli. Vamos a acompañar el dictamen en general, pero, obviamente, tenemos algunas diferencias. Quiero hacer tres reflexiones al respecto.

La primera es que cada vez que hablamos de "emergencia" y de personas con discapacidad hablamos de "sospecha". En la Argentina el tema de las pensiones no contributivas tiene la mancha de la sospecha. Es verdad que muchos gobiernos han hecho clientelismo con eso. Pero no significa que cada vez que hablemos de la dignidad de las

personas con discapacidad tengamos que empezar a ver a ese universo de personas con la mancha de la sospecha.

Los gobiernos tienen que reconciliarse con la palabra "control", pero este no puede ser coactivo, agresivo ni sospechoso.

Necesitamos cambiar el modo en que nos vinculamos con las personas con discapacidad en la Argentina, porque nos sobran leyes, pero nos faltan políticas. Siempre son grandes declaraciones, pero hay emergencias que nos faltan en esta ley. Hay emergencias que no están funcionando.

Quiero decirles que contamos con leyes que, por ejemplo, exigen el cumplimiento del cupo para personas con discapacidad en todas las instituciones del Estado y las provincias. Sin embargo, no sabemos si se cumple; no pueden ser los chicos y las chicas de las fotocopias en las entidades estatales.

Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay un punto en este proyecto de emergencia que vamos a acompañar, en donde incluimos una cuestión muy interesante: que hagan informes de control a esta comisión.

Necesitamos que el Poder Ejecutivo informe y que las comisiones auditen las políticas que sancionamos en este Congreso Nacional. Necesitamos que venga la ANDIS, y no solamente este organismo, sino también la Dirección de Empleo y de Trabajo, a los fines de informar cómo se implementan las leyes que sancionamos y no auditamos. Esto como primer punto.

En segundo lugar, informo que vamos a acompañar en general, pero hay cuestiones que vamos a proponer; por ello, contamos con un dictamen de minoría. Quiero hablar del tema de la emergencia. Un tema que nosotros defendemos es el presupuesto. Queremos números. No queremos delegar en el Poder Ejecutivo para que ponga los números a ciegas.

Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo en esta emergencia, porque es aquí y ahora. Se trata de supervivencia -tal como dijo la diputada Coli-, de los niños que no tienen una maestra integradora y de la pauperización de los servicios.

Necesitamos cubrir la emergencia, pero ésta debe ser acotada. No estamos de acuerdo en que sea tan larga, sino de aproximadamente un año y medio nada más.

Queremos al Poder Ejecutivo discutiendo presupuesto. Aquí se encuentra el diputado Heller, a quien tantas veces le exigíamos -al debatir el proyecto de ley de presupuesto en la Argentina- y siempre queríamos más. Han transitado funcionarios por aquí y nosotros hemos penalizado,

premiado y auditado, pero hace dos años que no tenemos números.

No quiero que la política de las personas con discapacidad quede encubierta en una emergencia macro o en decretos que no podemos auditar. Ni decretos ni emergencias permanentes. Queremos leyes que digan cómo tenemos que funcionar, cómo el Estado se vincula y cómo se auditan las provincias con las personas con discapacidad.

De manera que vamos a acompañar, pero lo haremos con estas exigencias diferentes. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra el señor diputado Valdés.

Sr. Valdés.- Señor presidente: seré breve en respeto a que lo importante hoy es que se sancione esta ley, es decir, firmemos el dictamen de comisión y podamos ir directamente a declarar la emergencia.

Quiero decir que independientemente de todo lo que sucedió antes, nunca estuvo tan mal el colectivo de personas con discapacidad. Desde que la palabra "auditar" se puso en boca de este gobierno, esto implicó negar derechos; no es que "auditar" significa auditar. Para cualquiera de las situaciones que la usan, es para negar derechos a las universidades, a los mayores o a las personas con discapacidad.

Sin embargo, es mucho más grave en el caso de este colectivo, porque todavía está vigente la resolución 187/25 y aún se encuentra en los portales del Estado. Ellos dijeron que la iban a modificar y no iba a servir más, pero lo cierto es que no sólo sigue figurando en los portales, sino que aún está vigente.

El verdadero pensamiento que tiene este gobierno sobre las personas con discapacidad es que son "idiotas", "débiles mentales" o "imbéciles". Esos son los argumentos con los cuales fundamentaron esa resolución, donde planteaban un baremo o una escala para medir la discapacidad, volviendo al modelo médico.

En ese sentido, voltearon las barreras sociales, porque las personas con discapacidad habían logrado salir de la cuestión médica o de salud. Han retrocedido todo y estamos como hace cincuenta años.

Por si faltaba algo, esa calificación que acabo de leer todavía está vigente, y solamente por la reacción que tuvieron los medios de comunicación -al momento de dictarse

esta resolución 187/25- dijeron que la iban a modificar. Aún no la modificaron, está vigente y es el verdadero pensamiento que tienen quienes nos gobiernan sobre el colectivo de discapacidad.

Por eso, quiero decir que la crueldad con el otro es la verdadera política de discapacidad que lleva adelante este gobierno. Por eso me solidarizo con todos los padres de personas con discapacidad que sienten, nos dicen y con las cuales nos comprometimos. Ellos nos preguntan qué será de su hijo el día que ya no estén. Por eso, nosotros, como representantes del Estado, tenemos la obligación de resolver esa situación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra la señora diputada Sarapura.

Sra. Sarapura.- Señor presidente: quiero decir que es muy importante que en el día de hoy estemos dando un mensaje claro a las personas con discapacidad.

Se ha dimensionado que la situación y los derechos de las personas con discapacidad son parte de una agenda prioritaria que se ha constituido en una agenda legislativa. A lo largo de todas las reuniones de comisiones hemos recibido y escuchado a las personas y a las organizaciones.

Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos la declaración de emergencia. Entendemos que es necesario profundizar la priorización de la garantía de derechos en la agenda de la política pública. Consideramos que eso no puede darse, hacerse ni ejercerse desde el no respeto a los instrumentos internacionales.

Por esta razón, creemos que la declaración de emergencia se debe marcar en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También entendemos que existen dos principios fundamentales que debemos respetar: el Estado como garante de derechos y las personas con discapacidad como sujetos de derechos.

Hemos visto que las organizaciones nos han planteado cambiar un paradigma respecto de las pensiones. Nosotros queremos darle una mirada y un sentido de promoción en este sentido, ya que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y, fundamentalmente, porque entendemos que demandan el respeto a su oportunidad de vida autónoma.

También hemos visto que al discutirse la cuestión de las auditorías, bien se ha expresado que nadie está en

contra del rol de contralor del Estado y del uso de los fondos públicos. Sin embargo, entendemos que estas auditorías no siempre se han llevado a cabo con el debido proceso, considerando la diversidad territorial e incluso, en ocasiones, no garantizando los principios de inclusión y de accesibilidad.

Por eso, cuando hablamos de las auditorías debemos recordar esos principios que son necesarios y que así lo establecen los instrumentos internacionales. Pensamos que cuando se habla de los recursos que se generan en los procesos de auditoría debemos mandar a la redistribución.

Asimismo, coincidimos con que ha habido una agenda que tiene que ver con la generación de empleo. Entonces, promovemos también un artículo que pone en agenda el reconocimiento para aquellas personas con discapacidad que entran al mundo del empleo, pero también para las empresas que incorporan a esas personas.

Creo que es fundamental dar muestra de que los diputados y las diputadas tenemos vocación de avanzar con la declaración de emergencia. Nuestra finalidad ha sido enriquecer la propuesta escuchando a las organizaciones, entendiendo que el Estado también tiene obligaciones.

Sr. Arroyo.- Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Vilca.

Sr. Vilca.- Señor presidente: como ya dijeron mis compañeros del bloque del Frente de Izquierda, nosotros apoyamos que se declare una emergencia en materia de discapacidad. Nos parece una cuestión importante en este momento.

Quiero referirme a algo más puntual -usted lo dijo en la presentación de la comisión- porque la situación actual de la discapacidad es grave. Me quiero referir al proceso que lanzó el gobierno, en el sentido de volver a pedir la certificación de las pensiones por discapacidad.

Le voy a contar un ejemplo de una señora, Ana López, de La Quiaca, a la cual le llegó el telegrama mediante el cual la citaron. Le dieron un tiempo para que se presente en una dependencia ubicada en la ruta 5, kilómetro 50, en plena Puna jujeña. La señora discapacitada, con muy pocos ingresos, juntó la plata para que un remisero la lleve. ¿Y sabe qué? No había nada. Digo esto para que tengan una idea de a dónde apunta este plan que tiene el gobierno, en el sentido de volver a pedir las certificaciones. Esta señora,

Ana López, cobra una pensión por discapacidad de 80.000 pesos. Para vivir tiene que vender gelatinas en la plaza.

Además de que le cuesta la movilidad, está buscando ahora cómo poder presentar esa certificación porque tiene la desesperación de perder el beneficio. Quizá no le alcance para mucho, pero sí para algo.

Nos contaba preocupada que no tiene quién la ayude; una vecina la aloja en una piecita porque su familia se encuentra lejos. Casos como este se repiten en muchas partes del interior.

La desesperación de pedir estos certificados con plazos que son bastante estrictos también tiene otra contracara. Hay un caso muy llamativo que denunció un medio nacional en el cual no sé cómo logró la ANDIS darle la potestad a una cadena de clínicas privadas y consultorios de un diputado libertario -que tiene una cadena de clínicas privadas- para certificar la discapacidad. Esto nos parece grave porque yo no sé si detrás de esto hay un curro o un negocio que juega con los sectores más vulnerables que están desesperados.

Están desesperados porque incluso hubo casos de personas con discapacidad que intentaron suicidarse, como lo registraron en el hospital Pablo Soria, de Jujuy. Hubo varios casos.

Esto nos parece grave. No podemos ponerle plazos a esto. El hecho de cuestionar el beneficio por discapacidad, en última instancia, busca quitarles ese beneficio a muchas personas que realmente la están pasando mal. En última instancia, esto busca un ahorro de plata y un ajuste, tal como dijo un compañero. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo más ajuste y así como vino sobre los trabajadores y la educación, también vendrá sobre las personas con discapacidad.

Los miembros de La Libertad Avanza tendrían que venir acá. Esto demuestra la crueldad y lo inhumano de un grupo de libertarios de la ultraderecha.

Entonces, quería reflejar esto también para seguir reafirmando la lucha del Frente de Izquierda junto con los jubilados y las personas con discapacidad porque sabemos que es importante el tema de que se declare la emergencia por discapacidad, pero creemos que hay que buscar una salida de fondo.

Mucha gente la está pasando mal y me parece que no alcanza solamente con buscar una solución a la discapacidad, los jubilados o las personas más vulnerables, sino que hay un

plan económico de Javier Milei y del Fondo Monetario Internacional que busca descargar la crisis sobre los sectores más vulnerables y los trabajadores.

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra el señor diputado Nieri, a quien le pido disculpas porque no sabía que completaba la presentación de la señora diputada Sarapura.

Sr. Nieri.- Señor presidente: seré muy breve. Quiero complementar lo mencionado por la diputada Sarapura.

Está claro que la situación del sector hoy es gravísima. Tenemos que ser justos. El diputado Maquieyra fue muy extenso en los números, pero yo quiero decir que en materia de prestaciones está claro que la situación se agravó en estos últimos meses. Sin embargo, si tomo el último año de la gestión anterior, cuando el IPC corría a un 161 por ciento anual, solo se actualizaron un 121 por ciento. Entonces, la situación ya era delicada y por eso tenemos que tomar cartas en el asunto. El problema se agravó y hoy los aranceles de los prestadores de la ley 24.901 requerirían, a los efectos de volver a los magros niveles de noviembre de 2023, una actualización del 33,5 por ciento.

Como bien dijo la diputada Sarapura, nosotros presentamos un dictamen donde planteamos la necesidad de la actualización y también ponemos énfasis en las auditorías. Como en todos los sectores del Estado, los recursos que se destinan son muchísimos; si lo hacemos de manera eficiente, podremos encontrar que con una reasignación de recursos los verdaderos beneficiarios de esto podrían estar enfrentando una situación mucho mejor. Entonces, nosotros valoramos las auditorías; creemos que tenemos que ir a fondo con responsabilidades penales de quienes agrandaron un sistema falsamente y con responsabilidades civiles de quienes cobran una discapacidad sin ser discapacitados. Creemos que ahí hay un montón de recursos que se pueden reasignar, lo que permitirá que estén en una mejor situación quienes deberían ser los únicos y reales beneficiarios de todo el sistema.

Luego presentamos una propuesta de modificación que busca la promoción del empleo. Estamos proponiendo modificar el artículo 87 de la ley 24.013 para incentivar a los empleadores a contratar personas con discapacidad y a hacer a veces las modificaciones que esto exige en cada uno de los lugares de trabajo. Para eso proponemos que los empleadores, por cada nueva persona que contraten, tengan una bonificación del 50 por ciento de las contribuciones patronales. Creemos

que de esta manera se puede trabajar en una inclusión laboral que haga cada vez más chico el sistema de asistencia por discapacidad. Así lo deseamos.

Sr. Presidente (Arroyo).- Tiene la palabra la señora diputada Tolosa Paz.

Sra. Tolosa Paz.- Señor presidente: hago mías las palabras de todos y cada uno de los diputados que seguimos señalando el hecho gravísimo de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado José Luis Espert, no esté presidiendo esta comisión que, además, fue emplazada. Es decir, tuvo la indicación del pleno para poder asistir aquí a conducir este dictamen de un proyecto de ley por el que se declara la emergencia en materia de discapacidad. Este proyecto cumplió todos los pasos en cada una de las comisiones con un amplio debate y una gran tarea de usted, señor presidente, y por supuesto de quien preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Ese trabajo de escucha de organizaciones, de prestadores, de las familias que tienen integrantes con problemas en materia de discapacidad y de las organizaciones no gubernamentales, durante muchos meses construyó esta declaración de emergencia en discapacidad. Esto no es una mera declaración que simplemente busca expresar la preocupación del drama que viven las personas con discapacidad hoy en la Argentina, sino también reparar algunas deudas pendientes que teníamos respecto de algunas de las denominaciones de, por ejemplo, la mal llamada "pensión por invalidez".

El cambio del nombre de la pensión no solamente era un hecho reparador -porque nadie es inválido incluso teniendo una discapacidad para poder seguir pensando en una vida plena, autónoma e independiente-, sino fundamentalmente también un compromiso que había asumido la Argentina no solamente en cuanto al cumplimiento de la convención, sino también en lo relativo al hecho de trabajar en todos los ámbitos de la legislación para poder empezar a compensar esas carencias en nuestra propia legislación.

Por eso celebro que esta declaración de emergencia busque, por supuesto, garantizar las partidas presupuestarias en algunas de las dificultades que ya tiene este colectivo. Por eso, me parece sano decir que parte de los capítulos tienen que ver con modificar el nombre de la mal llamada pensión e incluso ponee el foco en algo más. Bajo el

artilugio de decir que se otorgaban pensiones de mal manera a personas a las cuales no les correspondía, sin sistemas de control -como dijo el diputado Valdés-, hay un intento permanente de seguir ajustando las políticas sociales, en este caso, de aquellas que van directo al colectivo de discapacidad en la República Argentina.

No solamente empezaron la auditoría para poner en tela de juicio la condición de discapacidad, casi igualando a las personas con discapacidad a delincuentes y a falsificadores de información, sino que fundamentalmente al mismo tiempo congelaron lo que se conoce como la Ley de Empleo Protegido.

Como ustedes saben, en la República Argentina la ley de empleo protegido para personas con discapacidad vino a reparar la gran injusticia que todos conocemos, es decir, que de cada 100 personas con discapacidad solamente doce obtienen un empleo registrado en la República Argentina. Esa ley buscaba que el Estado acompañara en la transferencia de recursos. Esa transferencia de recursos, por ley, tiene que ser del 40 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

Usted, señor presidente, lo vuelve a reflejar en el articulado. Ahí deja de manifiesto justamente que parece increíble que tengamos que declarar en esta casa el incumplimiento de una norma que está vigente en la República Argentina. No solo eso: quien la incumple es la máxima autoridad, es decir, justamente la Agencia Nacional de Discapacidad, con su director, Diego Spagnuolo, al frente. Ellos deberían ser los primeros en cumplir esta ley de empleo protegido para personas con discapacidad.

El 40 por ciento del salario mínimo, vital y móvil representa 178.000 pesos. Este gobierno, que además de destratar y adjetivar de manera irresponsable y con una enorme crueldad al colectivo de discapacidad, le roba sistemáticamente a 6.000 hombres y mujeres 150.000 pesos todos los meses, luego de haber ingresado a la posibilidad de tener trabajo en un taller protegido. Están percibiendo, como usted lo ha dicho, 28.000 pesos por mes, cumpliendo cuatro horas de trabajo de lunes a viernes.

Los invito a quienes dudan en estar acá poniendo la firma en el dictamen a que visiten en sus provincias y localidades los talleres protegidos. Allí hacen tareas nobles de reciclado de bolsas de polietileno, labores importantísimas para la comunidad. Solamente un corazón totalmente endurecido, sin ningún tipo de sensibilidad y sin entender lo que le pasa a una familia que busca la autonomía

e independencia de ese pequeño niño o niña, que en muchos casos egresa de la escuela especial, no comprende el puente al trabajo que es el taller protegido.

Allí fueron a ajustar, sin piedad, sin clemencia. Allí pasaron la motosierra, que orgullosamente el funcionario Federico Sturzenegger le lleva en forma de *pin* a Kristalina Georgieva. Ese *pin* aquí también tiene el rostro de los talleres protegidos. Ese *pin* de la motosierra tiene la destrucción de la posibilidad de la vida autónoma e independiente, como reza, por supuesto, la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad.

Por eso celebro que el dictamen no solamente exija el cumplimiento, sino también lo adeudado desde que no se actualiza.

El diputado Valdés decía muy bien, haciéndonos cargo a todos en estos 42 años de democracia que cumpliremos a fin de año, que en este país siempre tuvimos una deuda con las personas con discapacidad, pero nunca estuvieron tan destratadas y olvidadas de la agenda pública.

Ellos están acá abajo, mientras nosotros tratamos de emitir este dictamen. Están acá las personas con sillas de ruedas, las que tienen diferentes dificultades, no solamente motrices, sino también mentales y sensoriales. Están acá con sus familias, con sus hermanos, buscando ser escuchados y mirados por nosotros en respuesta a sus problemas.

Por eso decimos que esta emergencia es integral, porque no solamente va a la búsqueda de sostener el empleo, sino que busca también la mejora en el acceso a las pensiones, cambiándole el nombre, pero también poniendo de manifiesto que no hay ajuste que se pueda hacer sobre ese colectivo.

Este dictamen también repara. Se llevaron puesto el decreto 566/2023, aquel sobre el que habíamos trabajado con mucho orgullo en nuestro gobierno, que permitía justamente el reconocimiento de que la pensión es la pensión, pero no es un pie en la cabeza de la persona con discapacidad y que la búsqueda de empleo registrado también se logra con la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado.

Si no queremos solamente alarmarnos con que tan solo doce de cada 100 personas con discapacidad tienen trabajo registrado, tenemos que pensar que el Estado tiene que promover sin duda el empleo registrado para este colectivo.

Por último, también el articulado habla -celebro que la diputada Soledad Carrizo lo haya mencionado- de la

posibilidad de control que nos corresponde como Poder Legislativo sobre las ejecuciones presupuestarias de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre las altas que deberían dar al empleo protegido, sobre las altas de las pensiones y fundamentalmente sobre el avance de la deuda que han construido con las prestadoras de nuestro sistema de prestaciones básicas.

No hay posibilidad de atender la discapacidad si no tenemos la mirada integral que perdió este gobierno. Alejarnos del modelo médico hegemónico y salir de la órbita de salud para garantizarle el derecho a las personas con discapacidad es parte de lo que expresa esta declaración de emergencia.

Para cerrar, una perlita. Ya que ayer tuvimos el honor de que nos llenaran de papeles en la interpelación que le hicimos al jefe de Gabinete de Ministros, de esos cientos de papeles respecto de los cuales a muchos los ofendía que estuviésemos buscando la información, salió una audiencia hermosa.

Evidentemente, el señor presidente sabrá que nosotros venimos insistiendo en la Comisión de Discapacidad para que Diego Spagnuolo venga a esta casa, dé cuenta del resultado de la auditoría, explique por qué congelaron las becas y por qué destrozaron los talleres protegidos. No ha venido, pero sí tiene tiempo, por supuesto, para ser parte de lo que se conoce como estas reuniones que se hacían en Olivos. El 10 de noviembre de 2024 tuvo tiempo para ingresar a las 18 y 38. Se fue a las 0 y 55, bastante tarde, seguramente con cena de por medio. ¿Con quién? Con Mauricio Novelli. ¿Le suena el famoso que está siendo investigado por la criptoestafa? Pero tuvo una gran reunión con Demian Reidel, otro de los capos y cráneos de la comunicación del gobierno. Allí, sentadito a su lado, estaba Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Menos cenas, menos pan y circo, más responsabilidad a la hora de gestionar las políticas públicas.

Seguramente trabajaremos muy fuerte para contar con la presencia, en la próxima reunión de la Comisión de Discapacidad, de este señor, que se nota que tiene bastante tiempo para tener agenda por fuera de la discapacidad.
(Aplausos.)

Sr. Presidente (Arroyo).- Informo al plenario de las comisiones que hemos obtenido dictamen de mayoría respecto

del proyecto contenido en el expediente 7.861-D.-2024.
(Aplausos.)

Además, tenemos tres dictámenes de minoría: uno presentado por el bloque del PRO, otro por el de la Unión Cívica Radical y otro por la bancada de Democracia para Siempre. Estamos en condiciones de ir a una sesión especial, atento a la urgencia del tema (Aplausos.)

Hay tres oradores que todavía no han hecho uso de la palabra. Además, a las dos de la tarde, en principio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene una nueva reunión. Consecuentemente, solo pido colaboración.

Tiene la palabra el señor diputado Juliano.

Sr. Juliano.- Señor presidente: la verdad es que mientras estábamos hoy en la vereda pensaba qué jodido tenés que ser para integrar la Cámara de Diputados, que tus pares te emplacen y no aparecer. ¿Con qué rostro vas a recorrer la provincia de Buenos Aires y vas a ir a ver a esos padres y talleres protegidos? ¿Con qué rostro vas a decir que tenés ganas de ser diputado de la Nación, si cuando ponemos la mano arriba de la Constitución lo hacemos pensando en nuestro propio pueblo?

Llamo a la reflexión en general. Dejemos juntos todos los bloques que hoy vinimos a dictaminar un mensaje que subyace a esta situación, que es que vamos a ir a una sesión especial porque tenemos la inmensa responsabilidad de dar respuesta, porque la situación actual así lo amerita. Porque cuando uno toca el tema de los talleres protegidos y ve que los salarios son de 28.000 pesos, ¿qué hace? ¿Mira para el costado?

Cuando vos ves que los aranceles quedaron congelados -lo que significa, en definitiva, el colapso de todo el sistema de prestaciones-, atrás están los padres, los abuelos, los familiares; está lo difícil que se torna a vivir. A eso se le agrega que un Estado te lo haga cuesta arriba, con una política que se construye sobre la base de que vos tengas que salir a explicar que vos no trampeaste al sistema, sino que éste se está resquebrajando.

Este es el espíritu que tiene que primar. En este sentido, celebro que todos los bloques que hoy vinieron a dictaminar lo hicieron con madurez política, pero también con sensibilidad humana.

Podemos hablar de números. Acá hay diputados que tienen una trayectoria enorme, pero desde el bloque de Democracia para Siempre queremos plantear algunos puntos.

Por supuesto, estamos a favor de la declaración de emergencia en materia de discapacidad. Creo que es una obviedad. Nosotros resolvimos llegar a un dictamen propio porque el espíritu de esta emergencia no es un cheque en blanco. La diputada Soledad Carrizo nos dejó trazada una hoja de ruta de las deudas que tenemos y debemos salir a contestar. No queremos ser irresponsables presupuestariamente para que no se llenen después la boca hablando de eso, pero esta situación amerita que nos hagamos cargo, y es lo que vinimos a hacer con este dictamen.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a los presidentes de las tres comisiones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Arroyo).- Gracias, diputado Pablo Juliano.

Tiene la palabra la diputada Liliana Paponet.

Sra. Paponet.- Señor presidente: la verdad es que uno, que habla con la gente y que está con diputados en el Congreso, ve que están de acuerdo con que hoy la Argentina está viviendo una crisis de discapacidad.

Digo esto porque la discapacidad en realidad tendría que ser transversal a todos los partidos políticos y hoy tendríamos que estar acá discutiendo cuál es el mejor proyecto que queremos llevar al recinto para tratar la emergencia.

Sabemos que las personas con discapacidad viven una crisis que no solamente viene de este gobierno, por supuesto; hace un montón de tiempo que las personas con discapacidad reclaman, pero lo que sí sabemos y somos conscientes es que este gobierno la ha profundizado. Todos sabemos eso y por eso hoy estamos tratando este proyecto de ley sobre emergencia.

Soy de Mendoza, de San Rafael particularmente, y la verdad es que allá sí hubo manifestaciones, como creo que lo ha habido en el resto del país. Muy preocupados, entregaron un petitorio que, si usted me permite, señor presidente, me gustaría leer, porque creo que es importante para ellos y que todos los diputados y diputadas que estamos acá sepamos que hay instituciones y familias que verdaderamente están interesadas en que este proyecto llegue al recinto y así obtengamos la media sanción correspondiente.

Dice: "Quienes suscribimos el presente petitorio, somos miembros de instituciones profesionales que trabajamos en el ámbito de la discapacidad. Familiares y personas con discapacidad nos dirigimos a ustedes con profunda

preocupación frente a la actual situación crítica que atraviesa el sector.

"Solicitamos con carácter urgente el tratamiento y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que reconozca la gravedad de la crisis. Hoy la falta de respuestas concretas y sostenidas por este Estado vulnera derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional en nuestro país.

"La demora en los pagos por parte de los financiadores, los aranceles desactualizados, la falta de recursos para garantizar prestaciones de calidad, el desfinanciamiento de instituciones y el impacto directo sobre la calidad de vida de miles de personas con discapacidad constituyen una emergencia social, económica y humanitaria.

"Pedimos que se prioricen los derechos de las personas con discapacidad, se establezca un marco de sostenibilidad para quienes brindan servicios esenciales y se garantice la continuidad de las prestaciones en condiciones dignas y equitativas.

"Adherimos al proyecto de ley de discapacidad.

"Por todo lo expuesto, exigimos: la declaración de la emergencia en discapacidad a nivel nacional; el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en las normativas vigentes; la actualización urgente y sostenida de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones según nomenclador nacional; la regularización de los pagos a prestadores e instituciones; el fortalecimiento del rol del Estado como garante de los derechos de las personas con discapacidad."

Las instituciones que firman son Antes Nunca Estuve, CITEA, Rehactiva, Asociación Civil Familias Genias, Recreo, Sinergia, Fundación TIPNEA, Sol del Este, Avanzar, LUZ Centro de Día, Hidro Kinesia, APRID, UTCE Zona Sur y Ubuntu.

Señor presidente, si usted me lo permite, voy a adjuntar este petitorio al expediente.

Quiero llamar a la reflexión a los diputados que, en algún momento para votar, como hicieron con el emplazamiento, se ausentaron o votaron en forma negativa. Creo que el objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de todas estas personas con discapacidad. Pienso que eso nos tiene que unir y por eso estamos debatiendo sobre esta emergencia, tratando de que no cierren instituciones y

tratando de mejorar el acceso igualitario a aquellas personas con discapacidad.

Considero que el hecho de que hoy no esté presente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda habla de una insensibilidad que tiene como prioridad el gobierno de Milei. Creo que sobre eso tenemos que trabajar, buscar y tratar de lograr consensos para llevar este proyecto al recinto y que finalmente logremos la media sanción. Gracias, señor presidente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Arroyo).- Gracias, diputada Liliana Paponet. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez.

Sr. Martínez (G.P.).- Señor presidente: agradezco a las autoridades del plenario, a los compañeros y compañeras.

Quiero ser muy breve; los compañeros y compañeras de nuestro bloque se han expresado con toda solvencia respecto al tema en particular.

Coincido en lo que dijo recién el diputado Juliano sobre la importancia de valorar a los que a pesar de todo decidieron estar presentes hoy. Pero no solamente por la obligación de un emplazamiento, sino por la convicción de que este es un tema que requiere estar presentes y dar una respuesta, aun con los matices que seguramente deben haber expresado y van a expresar los distintos dictámenes.

Ojalá tengamos la capacidad de construir los consensos para que en el menor tiempo posible no solamente tengamos una sesión especial para tratar este tema, sino que logremos aprobar algo que mueva el amperímetro, que sea significativo en la vida de los distintos colectivos de personas con discapacidad.

Pero quiero cuestionar algo que está pasando, que creo que no nos tenemos que acostumbrar y lo tenemos que marcar en cada momento.

La diputada Tolosa Paz hizo mención hace minutos a que es imposible esta metodología de funcionamiento de la Cámara. En este plenario teníamos dos comisiones que presidían compañeros nuestros: Discapacidad, el diputado Arroyo, y Acción Social y Salud Pública, el diputado Yedlin. Pudimos avanzar en las comisiones; en las comisiones firmamos despacho, tuvimos que ir al recinto, pedir una sesión especial y conseguir quórum, que lo hicimos con un conjunto de bloques. A partir de eso pudimos emplazar a este plenario; vinimos a este plenario y firmamos dictámenes.

Pero no vienen. Y no viene siquiera el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien tiene todo el derecho del mundo a dar o no dar quórum -vamos a partir de eso. Ahora, constituido el quórum, ¿tan poco vale un plenario de comisiones para que ni siquiera se haga presente y conduzca en minoría el plenario de estas comisiones? A no ser que yo no me haya enterado, creo que ni siquiera tuvo el gesto de avisar a las autoridades de la Comisión que no iba a estar presente.

Y creo que la actitud del diputado Espert...

Sr. Heller.- Sí avisó, diputado.

Sr. Martínez (G.P.).- Bueno, me alegro, me desdigo y pido disculpas.

Ahora, esta actitud de poner un cepo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al funcionamiento de absolutamente todos los temas, hay que decirlo, esto que pasa en Discapacidad se puede repetir dentro de un ratito que tenemos el plenario para los temas previsionales, porque estamos en la misma situación.

Mencionaba el diputado Massot en otra comisión -y recién se mencionó también, no sé si públicamente- que estaban preparando un pedido del artículo 109 por el tema universidades y la situación de los docentes; la emergencia en ciencia y tecnología, que viene trabajando la Comisión de Ciencia y Tecnología; la situación de las obras públicas, en particular hablamos mucho de vialidad, pero es la totalidad de la obra pública en las provincias. Todo eso ocurre porque hay un cepo en la Comisión de Presupuesto.

Creo que la Cámara de Diputados no se merece tener este trato por parte de un integrante de esta Cámara que pudo llegar al sillón de la Presidencia de la comisión -recuerdo esa escandalosa reunión constitutiva de la Comisión de Presupuesto-, pero sabemos todos que este es un ámbito horizontal de debate.

Ni siquiera valen los roles de presidente de bloque, porque todos valemos uno en la medida en que firmamos dictámenes y de eso se trata la cosa.

Y cierro diciendo que es grave. ¿Por qué hacen todo esto? Porque en realidad el debate que no quieren dar es sobre el presupuesto, que ya lo vimos el año pasado, y que llegamos hasta el momento en que Espert dijo: "Bueno, no se habla más del presupuesto", y no se habló más del presupuesto. Y así pasa y nadie dice nada; y sí lo decimos,

pero no tiene la repercusión, la envergadura. No me cabe la menor duda de que el cuerpo debe tomar decisiones fuertes para con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si alguien tiene dudas -acá veo a diputados de muchas provincias-, veamos el tema coparticipación.

Acá hay diputados y diputadas que somos de espacios políticos que gobiernan provincias y que son oposición en las provincias; que gobernamos provincias, pero somos de espacios políticos internos distintos a los que gobiernan. Pero olvidemos un cachito la cuestión relacionada con quién gobierna la provincia de la cual somos.

La coparticipación transferida a las provincias en febrero fue peor que en enero -supongamos que enero es el 100 por ciento para ponerlo de referencia-, en marzo fue peor que en febrero, y en abril está siendo -vamos a ver cómo termina, porque hoy es el último día- peor que en marzo.

Esa caída en las transferencias a las provincias es por goteo. Se transfiere día a día la coparticipación a las provincias, y después las provincias transfieren la coparticipación a los municipios y a las comunas. La provincia de Santa Fe tiene un sistema distinto y se hace con dos transferencias al mes.

En la primera transferencia de abril, la caída respecto a la primera transferencia de enero fue del 42 por ciento. ¡Estamos hablando de un 42 por ciento de caída! No son datos que sacamos solamente de las transferencias, sino que tienen que ver con el reclamo de los intendentes y de los presidentes comunales, y esto debe estar pasando en todas las provincias argentinas.

Entonces, valoro un montón que hayamos conseguido esto. Tenemos que avanzar hacia el recinto, tenemos que aprobar esta iniciativa, y llegar a los mayores consensos posibles. Pero miremos lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque todo lo que estamos hablando termina dependiendo de una asignación de recursos. Acá hay un carcelero que no nos deja trabajar como corresponde, y eso va en contra -aunque muchos no lo entiendan- de las prerrogativas, de los fueros, y de los privilegios -en el buen sentido de la palabra- que tenemos los diputados para poder trabajar como corresponde. No nos dejan trabajar de manera adecuada por el cepo que el diputado Espert pone en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ojalá podamos madurar una posición política transversal con respecto a este tema. Espero que todos miremos de cerca lo que está pasando en las provincias

argentinas con respecto a la coparticipación y su incidencia en el financiamiento de municipios y pueblos, que cada vez están más ahogados, porque les transfieren -de hecho- más funciones y más tareas que antes realizaban el gobierno nacional o muchas veces los gobiernos provinciales. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Arroyo).- Gracias, diputado Germán Martínez.

Agradezco a todos los diputados y diputadas. Hemos cumplido con la tarea que teníamos encomendada conformando un dictamen de mayoría y tres dictámenes de minoría. Ahora tenemos la obligación y el mandato de ir a una sesión especial, con lo cual, ese es el siguiente paso.

Damos por finalizada la reunión.

- Es la hora 14 y 8.